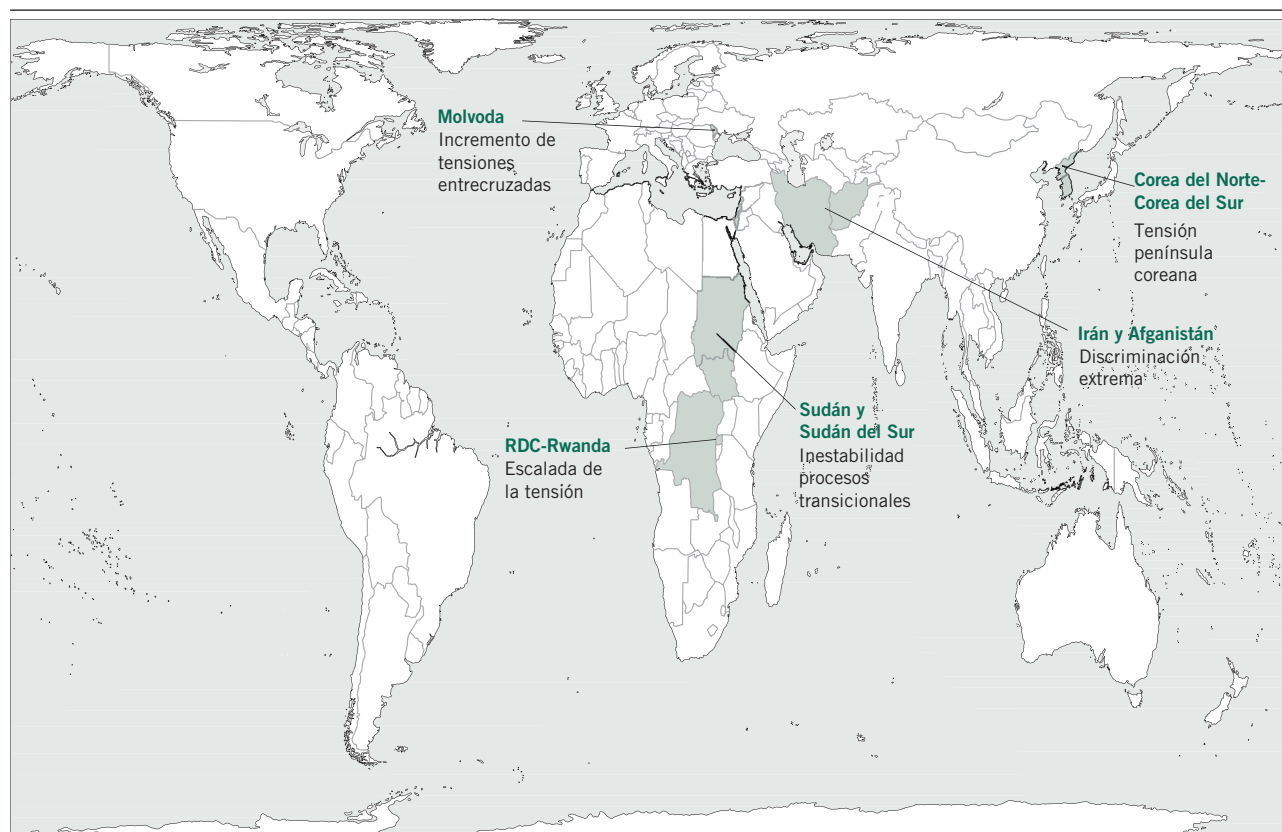


5. Escenarios de riesgo

A partir del análisis del año 2022 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial,¹ la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2023 o incluso a más largo plazo. Los escenarios de alerta hacen referencia a las crisis en los procesos transicionales en Sudán del Sur y Sudán, con posibilidades de amplificarse ante la deriva de violencia en este último país; al riesgo de escalada en la zona de Grandes Lagos producto del deterioro en las relaciones entre Rwanda y RDC; al incremento de la tensión política y militar entre Corea del Norte, por un lado, y Corea del Sur, EEUU y Japón, por el otro; al aumento de las tensiones multidimensionales en Moldova como consecuencia de la invasión Rusia a Ucrania; y al agravamiento de las políticas discriminatorias contra las mujeres y la intensificación de los intentos por controlar sus vidas y sus cuerpos en Irán y Afganistán, que ha derivado en la denuncia de su situación como un “apartheid de género”.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo



1. El análisis de cada contexto parte de la base de la revisión anual de los acontecimientos ocurridos en 2022 y recoge algunos elementos y dinámicas relevantes del primer cuatrimestre de 2023.

5.1. Sudán-Sudán del Sur: el deterioro de las transiciones políticas amenaza la estabilidad de la región

Desde la consecución de su independencia en 1956, Sudán ha vivido largos periodos bajo la sombra de la guerra y la inestabilidad. Más de 2,5 millones de personas perdieron la vida en la primera (1955-1972) y segunda fase (1983-2005) de la guerra civil sudanesa. Posteriormente, entre el año 2005 y el 2010 parte del país gozó de cierta estabilidad, producto de la firma del Comprehensive Peace Agreement (CPA) que puso fin a la guerra en la región meridional del país, aunque el inicio de la guerra en Darfur (2003) impidió hablar de años de paz. Durante la última década la región volvió a estar marcada por una profunda inestabilidad, producto de los efectos de la independencia de Sudán del Sur (2011), los convulsos procesos transicionales abiertos en Sudán y Sudán del Sur y los diferentes escenarios de conflictividad armada presentes en Sudan (Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul) y la guerra civil iniciada en Sudán del Sur en diciembre de 2013. Si bien durante este periodo también se han observado pasos positivos, como la firma de sendos acuerdos de paz (Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018 o el Acuerdo de Paz de Juba sobre Sudán de 2020) o la conformación de gobiernos transicionales en ambos Estados –así como la mejora de la relación entre ambos países a raíz de acuerdos de cooperación mutua en torno a delimitaciones fronterizas pendientes, entre las que destaca Abyei– la inestabilidad política y la violencia han seguido comprometiendo los esfuerzos para la construcción de la paz, la estabilidad y la democracia.

Mientras las transiciones en ambos países se tambalean, sus poblaciones se enfrentan a una importante crisis humanitaria que puede amplificarse con la nueva deriva violenta en Sudán

A mediados de abril de 2023 se produjo el último episodio de violencia que amenaza con afectar la ya de por sí frágil estabilidad de la región, a raíz del inicio de intensos combates en Jartum, capital de Sudán, y en otros puntos del país protagonizados por las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan (presidente del Consejo Soberano) y las fuerzas paramilitares Rapid Support Forces (RSF), dirigidas por el teniente general Mohamed Hamed Hamdan Dagalo “Hemedti” (vicepresidente del Consejo Soberano). Estos acontecimientos amenazan con tener un efecto boomerang, afectando, no solamente a la vecina Sudán del Sur, sino al conjunto de países fronterizos: Chad, República Centroafricana, Etiopía, Eritrea, Libia, Egipto o la República Democrática del Congo, muchos de los cuales presentan ya escenarios complejos de violencia.

La nueva crisis en Sudán es el último episodio generado desde las movilizaciones populares de finales de 2018

que conllevaron la caída del gobierno de Omar al-Bashir en abril de 2019, tras tres décadas en el poder. A partir de ese momento el país ha sido incapaz de lograr una transición política efectiva que permita superar las rémoras del antiguo régimen. Los militares usurparon el poder en abril de 2019, y si bien en agosto de ese año acordaron compartir el gobierno transicional con la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), en octubre de 2021 volvieron a dar un nuevo golpe de Estado disolviendo el gobierno transicional y destituyendo al primer ministro, Abdallah Hamdok. Tras un 2022 marcado por dos procesos de negociación entre la Junta Militar y la oposición política –el mecanismo trilateral (facilitado por la UNITAMS, la UA y la IGAD) y el Quad (EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos)– en diciembre se llegó a un acuerdo marco en el que los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y crear un gobierno civil de transición para abril de 2023. Sin embargo, la fase II de las negociaciones iniciada en enero de 2023, la cual pretendía abordar diferentes temas sensibles –entre los cuales, la justicia transicional; la reforma del sector de la seguridad, incluyendo la incorporación de las RSF al Ejército; el Acuerdo de Paz de Juba; el estado del comité de desmantelamiento del ex régimen de Omar al-Bashir; y la crisis en el este de Sudán– acabó por mandar el proceso transicional a la casilla de salida, que se ha traducido en el inicio de los enfrentamientos armados entre las SAF y las RSF.

En Sudán del Sur, el proceso transicional presenta ciertas similitudes con la crisis sudanesa. Tras cinco años de guerra, los dos principales actores responsables de la prolongación del conflicto –el Gobierno presidido por Salva Kiir y el SPLA-IO dirigido por el vicepresidente del Gobierno Riek Machar– firmaron un acuerdo de paz en 2018 (R-ARCSS) que posibilitó abrir un periodo transicional. Este acuerdo, no ha servido para poner fin a la violencia, sino que ha sido instrumentalizado continuamente por las partes. El último episodio se produjo en agosto de 2022, cuando el Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado (R-TGoNU) presidido por Kiir y vicepresidido por Machar, amplió unilateralmente el periodo de transición por otros dos años, situando las elecciones en diciembre de 2024. Sin embargo, muchos analistas intuyen que es probable que ni siquiera se llegue a esa fecha, ya que antes del fin del régimen transicional, tal como se prevé en el Acuerdo Revitalizado, debe estar en vigor una nueva Constitución, algo que hoy en día parece lejano. Asimismo, otra de las claves del Acuerdo es la creación de un ejército nacional unificado. Al igual que en el caso de Sudán,

los pasos para lograr esta integración y las controversias sobre los tiempos, forma y estructura de mando amenazan con hacer descarrilar el proceso transicional.

Mientras las transiciones en ambos países se tambalean, sus poblaciones se enfrentan a una importante crisis humanitaria que puede amplificarse con la nueva deriva violenta en Sudán. A finales de 2022, un tercio de la población de Sudán –más de 15 millones de personas– padecía inseguridad alimentaria grave, y 3,7 millones de personas se encontraban desplazadas internamente por la violencia, mientras que el país acogía simultáneamente a más de un millón de personas refugiadas de las crisis vecinas. En Sudán del Sur el escenario es similar. Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 6,6 millones de personas –más de la mitad de la población del país– afrontan una situación de inseguridad alimentaria aguda, hambre y desnutrición. Estas cifras podrían ascender hasta los 7,8 millones durante el primer semestre de 2023. Además, 2,3 millones de personas se encontraban refugiadas debido a la inseguridad. El estallido de la violencia en abril en Sudán podría tener otros efectos catastróficos en Sudán del Sur, sobre

Se requiere de una acción conjunta de los actores locales, nacionales, regionales e internacionales para lograr que las partes vuelvan a la mesa de negociación, pongan fin a la violencia y recuperen el espíritu de la transición

todo en su economía, ya que el 90% de los ingresos del país dependen de la exportación de petróleo a través de Sudán. Asimismo, también podría provocar, según estimaciones de las Naciones Unidas, que más

de 800.000 personas busquen refugio en otros países, amplificando la crisis de desplazamiento forzado en la ya muy tensionada región. Este impacto puede afectar también las dinámicas de violencia presentes en RCA, RDC, Chad, Libia o Etiopía (Tigré y Oromiya), además de las propias internas en Darfur, Kordofán Sur, Nilo Azul o en la región del este de Sudán y en Sudán del Sur, convirtiendo la región en un polvorín.

Si bien no se puede ignorar la posibilidad de que la crisis en Sudán degenera en una guerra prolongada, la intensificación del conflicto no es inevitable. Se requiere de una acción conjunta de los actores locales, nacionales, regionales e internacionales para lograr que las partes vuelvan a la mesa de negociación, pongan fin a la violencia y recuperen el espíritu de la transición. Si esto no sucede, el impacto de otra guerra en Sudán tendrá un efecto dominó impredecible en toda la región del África Central y el Cuerno de África.

5.2. Grandes Lagos: ¿a las puertas de una tercera guerra congoleña?

En 2022 se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda –constatadas y evidenciadas por Naciones Unidas–² de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Las diferentes iniciativas diplomáticas regionales, como el proceso de Luanda encabezado por Angola bajo el mandato de la UA, así como los ofrecimientos de mediación de países como Qatar y EEUU, han fracasado hasta el momento de cara a revertir la situación. A mediados de abril de 2023, el presidente ruandés Paul Kagame atizó el fuego culpando de la crisis del M23 a la delimitación de la frontera de la era colonial,³ afirmando que “una gran parte de Rwanda quedó fuera, en el este de RDC y el suroeste de Uganda”; dándole una nueva dimensión al conflicto. Kagame también defendió a los rebeldes del M23 afirmando que se les niegan sus derechos en RDC remarcando que “el problema de RDC, el problema regional o el problema de Rwanda no es el M23”. En respuesta, Kinshasa denunció estas declaraciones como una nueva provocación por parte de Rwanda y responsabilizó a Kagame de todos los problemas en el este del país durante los últimos 20 años. La retórica de acusaciones e incidentes sobre el terreno han situado la tensión entre ambos países al borde de un conflicto armado de peligrosas consecuencias regionales.

Aunque la apelación de Paul Kagame en torno a la delimitación fronteriza realizada en la era colonial podría contribuir a dibujar los orígenes del conflicto que padece la región –como tantas otras consecuencias derivadas del colonialismo que siguen todavía abiertas y forman parte de la génesis de éste y otros conflictos en el continente– el pasado reciente contribuye notablemente a situar las tensas relaciones entre RDC y Rwanda.⁴ A principios de los noventa, el mariscal zaireño Mobutu Sese Seko apoyó al régimen ruandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del Rwandan Patriotic Front (RPF), insurgencia liderada por Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 consiguió derrocar y expulsar al régimen responsable de este y tomar el poder en Rwanda. A partir de entonces

se sucedieron la primera y la segunda guerra del Congo, que acabaron con la firma de diversos acuerdos de paz y la retirada de las tropas extranjeras del país entre 2002 y 2003, principalmente de Rwanda. Éstas justificaban su presencia por la existencia de grupos insurgentes nacionales en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congoleñas para desarticularlos, mientras ejercían el control y la expoliación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por estos, en especial Rwanda. La existencia de grupos insurgentes enemigos de Rwanda, Uganda y Burundi, la permanencia de las causas de fondo del conflicto en RDC en sus múltiples niveles y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar estos grupos provocó el surgimiento en 2012 del M23, apoyado por Rwanda. A pesar de la firma de un nuevo acuerdo de paz en diciembre de 2013, en 2021 el grupo volvió a reorganizarse con el apoyo ruandés.

La inacción internacional para frenar el genocidio de 1994 ha llevado a Rwanda a convertirse en el aliado de Occidente en la región, blindándole de las críticas por el autoritarismo del régimen y su injerencia en los asuntos congoleños

El 4 de abril de 2012, el grupo armado M23⁵ se rebeló contra el Gobierno congolés aseverando el incumplimiento del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009. Nkunda, quien había sido un oficial en el grupo armado RCD-Goma –grupo armado “proxy” de Rwanda en la segunda guerra del Congo (1998-2003)–, oficialmente sigue en arresto domiciliario en la localidad ruandesa de Gisenyi. El 20 de noviembre de 2012, el M23 entró en las calles de Goma, capital de Kivu Norte, tras la deshonrosa retirada de las tropas congoleñas de la ciudad y ante la mirada impasible de los cascos azules de la ONU, dejando grabada la fecha en el imaginario colectivo congolés. El pillaje, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otros crímenes de guerra fueron su carta de presentación. En 2013 RDC y Rwanda alcanzaron un acuerdo de paz según el cual el M23 debía ser desarticulado. Sin embargo, a finales de 2021 este grupo retomó sus actividades con el apoyo de Rwanda y desde entonces ha sembrado nuevamente el pánico en territorio congolés y ha amenazado nuevamente con plantarse en el corazón de la capital.⁶

Todos estos líderes insurgentes apoyados por Rwanda formaban parte de la comunidad tutsi banyamulenge,

2. Consejo de Seguridad de la ONU, [informes del Grupo de Expertos](#), Comité de Sanciones de la RDC [en línea, consultado el 15 de enero de 2023].

3. Infosplus RDC, [Paul Kagame dévoile la vraie raison du conflit Rwanda – RDC](#), 16 de abril de 2023.

4. Véase síntesis y resumen de la tensión RDC-Rwanda en el capítulo 2 (Tensiones).

5. El grupo se denomina Movimiento 23 de Marzo en referencia al día de la firma de un acuerdo de paz tres años antes, el 23 de marzo de 2009, entre el Gobierno congolés y el Congr s National pour la D fense du Peuple, liderado por Bosco Ntaganda, cargo que hab a arrebatado al general Laurent Nkunda, quien hab a dejado de ser el protegido de Rwanda y que fue arrestado camino de Kigali. Para profundizar en torno a los or genes del M23, v ase, entre otros, las s ntesis de RDC (este) en el cap tulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, [Alerta 2010! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcci n de paz](#), Barcelona: Icaria, 2010; y [Alerta 2014! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcci n de paz](#), Barcelona: Icaria, 2014; Sabbe, Brian, [Why M23 is not your average rebel group](#), IPIS Briefing, enero de 2023.

6. V ase el resumen del conflicto armado RDC (este) en el cap tulo 1 (Conflictos armados).

hermana de la comunidad tutsi que habita en Rwanda y que fue masacrada en el genocidio de 1994. Entre otros muchos factores, en la pervivencia de esta insurgencia conviven argumentos como el miedo, la protección de su propia comunidad, la explotación del territorio congolés y sus recursos, la ausencia de otras perspectivas de futuro y sustento ante una fracasada reforma del sector de la seguridad, su instrumentalización como actor proxy de Rwanda dentro de territorio congolés. Otra cuestión a tener en cuenta es la venganza y persecución de las Forces Démocratiques de Libération du Ruanda (FDLR), movimiento político-militar que ha pretendido un cambio político en Rwanda por la fuerza y heredero de aquellos que cometieron el genocidio de 1994, cuya eliminación es un leit motiv para Rwanda y para esta serie de grupos armados y escisiones, y sirve como argumento permanente para justificar que Rwanda actúe con total impunidad financiando, armando y atacando el territorio congolés. La inacción de la comunidad internacional para frenar el genocidio de 1994 llevó a esta a apoyar al nuevo régimen ruandés surgido tras el genocidio y a convertirlo en su aliado privilegiado en la inestable región. Este apoyo político internacional y el compromiso de Rwanda en la promoción de la paz y la seguridad en el continente, participando activamente en misiones de la ONU y bilaterales –como en el norte de Mozambique– le han granjeado un área de respetabilidad y de compromiso con la construcción de la paz que le ha blindado de las críticas relativas al autoritarismo del régimen ruandés, caracterizado por restringir el espacio político y la libertad de expresión y silenciar la disidencia política. También le ha blindado de las críticas relativas a la injerencia de Rwanda en los asuntos internos congoleños. Rwanda, a pesar de haber sido señalada por la ONU desde 2001 hasta en su último informe interno filtrado en agosto y por el Grupo de Expertos en diciembre de 2022 por participar directa o indirectamente en la explotación de los recursos naturales de forma sistemática y sistemática y de armar y organizar rebeliones para proteger a la comunidad banyamulenge y a sus intereses en los Kivus, y aunque ha recibido numerosas críticas, sigue sin ser sancionada por la ONU y el resto de actores de la comunidad internacional. Sin embargo, todos estos elementos también ponen de manifiesto que el conflicto

Es imprescindible un análisis más profundo para comprender las dinámicas locales, regionales e internacionales que se encuentran en la génesis del conflicto entre RDC y Rwanda de cara a intentar promover su resolución

no es simplemente una agresión externa de Rwanda sobre RDC, como ha intentado remarcar el presidente congolés en múltiples ocasiones.

Es imprescindible un análisis por parte de los actores clave que pueden influir en ambos países que sea más exhaustivo, incluya otras dimensiones desde una mirada multicausal y multinivel, y vaya más allá de reducir el conflicto a una mera confrontación étnica o a la explotación de los recursos como medio y fin para financiar la guerra y que cuya resolución se traduzca únicamente

en desarticular a los grupos armados o conseguir ceses de hostilidades, amén de los múltiples procesos de DDR con los actores armados. Es imprescindible entender las raíces históricas y culturales de los pueblos de la región; el expolio continuado y la injusticia social vivida desde la opresión colonial y postcolonial; los agravios de la población local frente a las poblaciones sobrevenidas; la instrumentalización de las diferencias étnicas por parte de Mobutu y posteriormente por Kabila padre e hijo; la presión y la competencia sobre la propiedad de la tierra; los legítimos retos de seguridad de los países vecinos, en especial Rwanda frente al gigante congolés; la creciente presencia postcolonial anglófona y china frente a la progresiva marginalidad francófona; las dinámicas regionales e internacionales vinculadas no solo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas geopolíticas donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental, en un mundo globalizado en el que las grandes potencias como EEUU y China compiten para ampliar sus áreas de influencia. Un mundo globalizado que ha ratificado la receta del modelo de Estado liberal para solucionar los problemas de la RDC, pero que no los ha resuelto, como se evidencia nuevamente con esta enésima escalada de la violencia. Las intervenciones locales y de la comunidad internacional para resolver el conflicto no afrontan las causas de fondo que dieron origen a la guerra y a la inestabilidad que arrastra la región como consecuencia de un análisis no enfocado hacia las raíces del conflicto que enfrenta a ambos países, así como tampoco por parte de los actores internacionales –ONU, China, EEUU y UE, principalmente– que tienen capacidad real de presión sobre ambos países de cara a frenar esta peligrosa escalada de la tensión.

5.3. El incremento de la tensión militar en la península coreana

Tras un breve período en el que las relaciones intercoreanas alcanzaron su momento de mayor cercanía y cooperación en décadas y en el que Corea del Norte y EEUU iniciaron un proceso de aproximación y diálogo respecto de la desnuclearización de la península coreana (2018-19), en los últimos años, y muy claramente desde 2022, la tensión política y militar en la península coreana ha escalado ostensiblemente. Dicha escalada no solamente ha incluido un incremento de la habitual retórica militarista y de las acusaciones cruzadas, sino también un aumento de la tensión militar y los episodios bélicos entre Corea del Norte y Corea del Sur en la frontera terrestre y marítima, un incremento sin parangón en el número de lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, una creciente asertividad de Corea del Sur en la respuesta a los ensayos armamentísticos de Pyongyang, la reanudación del programa nuclear y la fabricación de nuevo armamento por parte de Corea del Norte, el incremento de la tensión entre Corea del Norte y Japón, y la creciente cooperación entre EEUU y Corea del Sur en materia nuclear.

Respecto de esta última cuestión, el 26 de abril de 2023, el presidente de EEUU, Joe Biden, y el de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, estrecharon su cooperación militar en materia nuclear a través de la firma en la Casa Blanca de la llamada Declaración de Washington, en la que, en esencia, Corea del Sur se compromete a no desarrollar su propio programa atómico y, por su parte, EEUU se compromete a reforzar el rol de Corea del Sur en la toma de decisiones en materia de planificación y disuasión nuclear. Concretamente, dicho acuerdo, que se firmó para conmemorar el 70º aniversario del inicio de la alianza entre ambos países, contempla la ampliación y profundización de la cooperación entre ambos ejércitos; el reforzamiento de los ejercicios y maniobras militares conjuntas; la creación de un nuevo Grupo Consultivo Nuclear para reforzar la llamada “disuasión ampliada”; o el próximo envío de un submarino nuclear de misiles balísticos estadounidense a Corea del Sur. Durante la rueda de prensa posterior a la firma de la Declaración, Biden señaló que cualquier ataque nuclear de Corea del Norte sería respondido de manera rápida y abrumadora, pero a la vez dejó claro su negativa a emplazar armas nucleares en la península coreana.

Tales declaraciones de Biden, así como el compromiso del Gobierno surcoreano de respetar el Tratado de No Proliferación Nuclear, toman especial significación después de que en los últimos meses se haya incrementado notablemente el porcentaje de la ciudadanía surcoreana que aboga por el despliegue de armas nucleares en Corea del Sur o bien por el desarrollo de un programa nuclear propio (en 2022 tal porcentaje superó el 70%). En la misma línea, a principios de 2023 el presidente Yoon Suk-yeol declaró estar sopesando desarrollar sus propias armas nucleares

o pedir a EEUU que las desplegara en la península coreana, y pidió públicamente que Seúl y Washington intensificaran su colaboración en materia de armamento nuclear, incluyendo la planificación, el intercambio de información, los ejercicios y el entrenamiento. En 1991, EEUU retiró todas sus armas nucleares de la península de Corea y al año siguiente Corea del Norte y Corea del Sur firmaron una declaración conjunta según la cual ninguna de las dos fabricaría, probaría, almacenaría, desplegaría o usaría armas nucleares. Sin embargo, en las décadas siguientes Corea del Norte ha violado repetidamente tales compromisos hasta el punto de haber llevado a cabo seis ensayos nucleares (el primero en 2006 y el último en 2017, con una bomba de hidrógeno con una potencia de detonación muy superior a las anteriores), haber acumulado decenas de ojivas nucleares –entre 40 y 50, según algunas fuentes–, y de haber fabricado suficiente material fisible para construir al menos varias bombas más cada año. En paralelo, en los últimos años Corea del Norte también ha mejorado su programa de misiles balísticos de largo recorrido, así como su capacidad de miniaturización de cabezas nucleares. Además de sus capacidades nucleares y balísticas, Pyongyang cuenta con unas fuerzas convencionales importantes, con 1,2 millones de soldados en servicio y 600.000 reservistas.

Tras un período de distensión y diálogo con EEUU y Corea del Sur en el que Corea del Norte se comprometió a congelar su programa nuclear, cerrar algunas de las principales instalaciones del país e imponer una moratoria de nuevos ensayos nucleares, en los últimos años ha habido numerosas advertencias –por parte tanto de los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur como del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y algunos centros de investigación– de que Corea del Norte está reactivando y acelerando su programa nuclear. Concretamente, en 2022 señalaron que Corea del Norte estaba reactivando la principal instalación de ensayos nucleares del país en Punggye-ri –supuestamente clausurada en 2018 como parte del proceso diplomático con EEUU– y advirtieron en varios momentos del año sobre la posibilidad de que Corea del Norte llevara a cabo un nuevo ensayo nuclear, que sería el primero desde 2017. De hecho, Naciones Unidas afirmó en un informe confidencial filtrado en agosto de 2022 que Corea del Norte había realizado preparativos para un ensayo nuclear durante los primeros seis meses de 2022. En la misma línea, en septiembre Corea del Norte promulgó una nueva ley que especifica las condiciones para el despliegue y uso del arsenal nuclear. La norma estipula que Pyongyang no atacará a los estados no nucleares –excepto si se alían con estados nucleares–, y también que el uso de armas nucleares podría servir para prevenir la expansión o prolongación de una guerra o en respuesta a un ataque contra el país.

En paralelo a la reanudación de su programa de armas nucleares y a la aprobación de una legislación que facilita su despliegue y utilización, en 2022 también se incrementó claramente el lanzamiento de misiles y la producción de nuevos armamentos por parte de Corea del Norte. De hecho, en todo el año 2022 Pyongyang lanzó alrededor de un centenar de misiles, varios de ellos intercontinentales, una cifra claramente superior a los ocho lanzamientos que se produjeron en 2021 o a los cuatro del 2020. Además del dramático incremento en la frecuencia de tales lanzamientos, varios analistas también expresaron su preocupación por el tipo de armamento que testó Pyongyang durante el año, incluyendo misiles crucero y balísticos, armas hipersónicas o misiles intercontinentales balísticos de gran alcance (como el Hwasong-17, con un recorrido de unos 15.000 kilómetros). En los primeros cinco meses del 2023, la tendencia no parece haber cambiado significativamente respecto del año 2022. A mediados de febrero, con pocos días de diferencia, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental Hwasong-15 —que alcanzó casi 6.000 km de altitud antes de caer en el Mar del Japón (conocido en Corea como Mar del Este)—, dos cohetes “tácticos nucleares” y cuatro misiles crucero de largo alcance. En marzo, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental Hwasong-17 en dirección al Mar del Este, así como múltiples misiles crucero de largo alcance. A mediados de abril, Corea del Norte declaró haber llevado a cabo con éxito su primera prueba de vuelo del misil balístico intercontinental de combustible sólido Hwasong-18, lo que según algunos análisis supone un importante paso en los esfuerzos de Pyongyang para proteger el sistema de misiles del país de un ataque preventivo. Poco después, Kim Jong-un declaró su intención de lanzar un satélite de reconocimiento militar —una de las cinco prioridades militares anunciadas por el líder norcoreano en enero de 2021—, en plena consonancia con las afirmaciones previas del Gobierno norcoreano de que había desarrollado un potente motor de cohete que podría garantizar el lanzamiento de dicho satélite. A finales de 2022, Pyongyang publicó fotos a gran altitud de las ciudades de Seúl e Incheon y declaró haber lanzado exitosamente un cohete espacial como parte del desarrollo de un satélite de reconocimiento militar.

El desarrollo de nuevo armamento por parte de Corea del Norte está en plena consonancia con el plan quinquenal dado a conocer por Kim Jong-un durante el 8º Congreso del Partido en 2021 —que preveía, por ejemplo, misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido capaces de ser lanzados tanto por tierra como por mar— o con su discurso de fin de año (31 de diciembre de 2022) en el que prometió aumentar exponencialmente la fabricación de armas nucleares en 2023. En dicho

mensaje, el líder norcoreano también anunció estar desarrollando un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales con capacidad de contraataque nuclear rápido, como respuesta a las amenazas de EEUU y Corea del Sur y a la creciente coordinación entre estos dos países y Japón. Respecto de esta última cuestión, cabe destacar que en los últimos tiempos también se ha incrementado notablemente la tensión entre Corea del Norte y Japón. A modo de ejemplo de sucesos recientes, en octubre de 2022 un misil balístico norcoreano de alcance intermedio sobrevoló Japón por primera vez desde 2017 y, al mes siguiente, uno de los 26 misiles que Pyongyang disparó en dos días consecutivos cayó a 200 km al oeste de la isla japonesa de Hokkaido (norte). Ante tal situación, Washington dejó claro su compromiso con Japón, mientras que Tokio participó en ejercicios navales conjuntos con Corea del Sur y EEUU por primera vez desde 2017 y además declaró su disposición a reforzar sus capacidades defensivas y de contraataque. En esta línea, en diciembre del 2022 el Gobierno japonés presentó públicamente su

En abril de 2023, los líderes de EEUU y Corea del Sur firmaron la Declaración de Washington, en la que Corea del Sur se compromete a no desarrollar su propio programa atómico y Washington a reforzar el rol de Corea del Sur en la toma de decisiones en materia de planificación y disuasión nuclear

nueva estrategia de seguridad nacional, que incluye el programa nuclear y balístico de Corea del Norte como amenaza. Por su parte, Pyongyang advirtió que la llamada “capacidad de contraataque” incluida en la nueva estrategia de seguridad nacional de Japón no se refiere al derecho a la legítima defensa de cualquier estado soberano, si no a la capacidad de llevar a cabo un ataque preventivo contra terceros países, lo cual entraña, a su parecer, una grave crisis de seguridad en la península de Corea y en Asia oriental en su conjunto. Ante tal escenario, algunos análisis consideraron que el lanzamiento de misiles que crucen el espacio aéreo de un tercer país sin previo aviso ni coordinación —como hizo Corea del Norte en octubre de 2022— no solamente contraviene la legislación internacional, si no que, a la luz de la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada por Japón, podría ser interpretado como un ataque en su contra por parte de Tokio.

Otro de los factores que ha provocado un incremento de la tensión en la región ha sido el cambio de política hacia Corea del Norte que ha impulsado el nuevo presidente surcoreano Yoon Suk-yeol desde su asunción en el cargo en mayo de 2022. Esta nueva dirección estratégica se ha traducido, entre otras cuestiones, en que el Gobierno surcoreano ha respondido al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte con el lanzamiento de un número proporcional de proyectiles; ha impulsado los ejercicios y maniobras militares (normalmente en alianza con EEUU) de mayor envergadura de los últimos tiempos y ha intentado estrechar su relación con EEUU en cuanto al uso de armamento nuclear en la península. Como consecuencia, la tensión militar entre ambos países se incrementó ostensiblemente a finales de 2022, con varios episodios de cierta gravedad. A finales

de octubre, ambos países intercambiaron disparos de advertencia en la Línea Límite Norte (LLN), la frontera marítima de facto, en disputa entre ambos países, cerca de la isla Baengyeong. Poco después, en noviembre, en dos días consecutivos Pyongyang disparó más de 20 misiles –uno de los cuales cayó al sur de la LLN, a pocos kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho– y unos 100 proyectiles de artillería cerca de la frontera marítima. En diciembre, cinco drones norcoreanos se adentraron en el espacio aéreo surcoreano, no pudiendo ser derribados por aviones y helicópteros surcoreanos. Ya más recientemente, en febrero de 2023, Corea del Sur y EEUU realizaron simulacros conjuntos con bombarderos y pocos días después destructores surcoreanos, estadounidenses y japoneses participaron en un simulacro de defensa antimisiles frente a la costa este de la península. Igualmente, a mediados de marzo, EEUU y Corea del Sur comenzaron los mayores ejercicios militares desde 2018.

Algunos análisis sostienen que China, que históricamente ha tenido una clara ascendencia sobre el

La tensión militar entre ambos países se incrementó ostensiblemente a finales de 2022, con varios episodios de cierta gravedad

régimen norcoreano, desincentivará cualquier escalada nuclear que pueda desestabilizar la península coreana, y otras voces sostienen que tanto la aceleración del programa armamentístico norcoreano como la mayor asertividad estratégica de Seúl pueden explicarse en parte por razones internas, pero parece claro que la situación en la península coreana vive una dinámica que no está exenta de riesgos. A juzgar por las recientes declaraciones de representantes del Gobierno norcoreano, no parece que la escalada política y militar en la península coreana vaya a remitir en los próximos meses. A mediados de abril, Pyongyang respondió a una declaración del G7 en la que se le pedía que dismantelara sus capacidades nucleares reafirmando su negativa a negociar o renunciar a su capacidad de disuasión nuclear. En la misma línea, a principios de mayo, Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong Un advirtió que la Declaración de Washington firmada por EEUU y Corea del Sur solamente deteriora la paz y la seguridad en la península, refuerza el derecho de Corea del Norte a la autodefensa y reafirma a Pyongyang en su determinación a acelerar y perfeccionar sus capacidades nucleares.

5.4. Desafíos entrecruzados en Moldova en tiempos de guerra en Europa

Moldova, país de 2,6 millones de habitantes, con una tasa de pobreza absoluta del 24,5% (26,3% en el caso de mujeres), fronterizo con Rumanía y Ucrania, ha sido considerado uno de los países más vulnerables a la extensión de la guerra en Ucrania. Exrepública soviética, neutral con respecto a la OTAN, con una trayectoria política afectada por problemas de corrupción, así como por divisiones políticas incluyendo en torno a la orientación del país en política exterior, y con un conflicto no resuelto en torno al estatus de la región de Transnistria, Moldova es escenario de un incremento de tensiones multidimensionales y entrecruzadas, influidas por la invasión de Rusia contra Ucrania. El deterioro de la situación ha tenido reflejo en ámbitos como riesgos de extensión de la guerra a Moldova, denuncias de planes de golpe de Estado encubierto, riesgo de mayor polarización con expresión territorial, crisis energética y deterioro de la seguridad humana. Citas electorales a corto y medio plazo (municipales en el último tercio de 2023, presidenciales en 2024 y parlamentarias en 2025) añaden incertidumbre.

Moldova es escenario de un incremento de tensiones multidimensionales y entrecruzadas, influidas por la invasión de Rusia contra Ucrania

El deterioro de la situación en Moldova abarca diversas esferas. En primer lugar, el inicio de la invasión rusa de Ucrania generó riesgos en un primer momento de extensión directa de la guerra a Moldova y empeoró la situación de seguridad en el país. La evolución del conflicto armado en Ucrania a lo largo de 2022 ha mantenido estos riesgos alejados, de la mano del mantenimiento del control de Odesa por Ucrania, que disiparon los temores de que las tropas rusas pudiesen llegar a Transnistria. Esta franja de territorio al este del río Dnieper, de mayoría rusoparlante, ha sido escenario de un conflicto no resuelto en torno al estatus de la región desde el conflicto armado de 1990-1992 y donde Rusia mantiene fuerzas militares⁷ No obstante, el contexto de seguridad se mantuvo frágil, incluyendo incidentes de seguridad en Transnistria – señalados en algunos análisis como ataques de falsa bandera promovidos por Moscú–,⁸ violaciones del espacio aéreo de Moldova por misiles rusos disparados desde el Mar Negro y dirigidos contra Ucrania –Moldova denunció al menos tres en octubre de 2022 y otros dos en febrero de 2023–, e impactos de fragmentos de misiles rusos en territorio de Moldova. Todo ello puso de manifiesto riesgos en el ámbito militar, estrechamente vinculados a una guerra de perspectivas inciertas.

En segundo lugar, se identifican riesgos de intentos de desestabilización política y socioeconómica de Moldova por parte de Rusia. En febrero de 2023, la presidenta moldava, Maria Sandu, denunció en base a información de inteligencia compartida por Ucrania, planes de Rusia de un golpe de Estado en Moldova mediante individuos con experiencia militar de Rusia, Belarús, Serbia y Montenegro que se infiltrarían como civiles y tomarían edificios gubernamentales.⁹ Según Sandu, el intento de golpe preveía contar con apoyo de grupos locales como el partido opositor pro-Kremlin Shor –liderado por el magnate y político Ilan Shor, sentenciado in absentia por fraude masivo en el sistema bancario en 2014 (caso en el marco del cual se condenó a otros actores económicos y políticos de diferente signo). En los últimos meses de 2022 ya se habían incrementado los temores de riesgo de injerencias externas de la mano de las protestas antigubernamentales organizadas por el partido Shor en septiembre y que se prolongaron a 2023 y en la que se reclamó la dimisión del gobierno y la presidenta moldava.¹⁰ Periodistas moldavos publicaron evidencias de The Washington Post, en base a revisión de documentos obtenidos por los servicios de inteligencia de Ucrania, señaló que Rusia había destinado decenas de millones de dólares de compañías estatales rusas a la promoción de una red de políticos moldavos afines y a reorientar el país a la esfera de Rusia.¹¹ A su vez, periodistas moldavos hicieron públicos en 2023 documentos de 2021 de la administración presidencial del Kremlin que mostraban planes de Rusia de llevar a Moldova a su esfera de influencia para 2030¹² (en 2021 el partido pro-UE PAS ganó las elecciones parlamentarias con el 53% de los votos, frente al pro-ruso Bloque de los Comunistas y Socialistas, que obtuvo el 27%, y el partido Shor obtuvo un 5,8%, con una participación del 48%). Se suman otros elementos como el nivel sin precedentes de ciberataques que Moldova afronta desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

En tercer lugar, el escenario de riesgos de tensión multidimensional que afrontaba Moldova se reflejó también en Gagauzia, región discontinua territorialmente en el sur del país, escenario de conflicto político a inicios de los noventa sobre su estatus, con régimen de región autónoma desde mediados de esa década, de 134.535 habitantes (censo de 2014), habitada mayoritariamente

7. En Transnistria hay presencia de unas 1.500 fuerzas rusas. No obstante, algunos análisis relativizan el riesgo militar que supone para Moldova esta presencia y señalan que, en su mayoría, son ciudadanos locales con pasaporte ruso y solo un centenar serían oficiales de Rusia. De Waal, Thomas, "Time to Get Serious About Moldova", Carnegie Europe, 11 de mayo de 2023.

8. Pociumban, Anastasia, "Moldova's Fragile Security Situation", DGAP Memo, German Council of Foreign Relations, 13 de mayo de 2023.

9. Wesolowsky, Tony, "Vulnerable, Volatile Moldova Could Be The Kremlin's Next Target. It Could Also Be Just Another Distraction", RFE/RL, 3 de marzo de 2022.

10. Calugareanu, Vitalie y Robert Schwartz, "Pro-Russian group pays protesters in Moldova", DW, 10 de diciembre de 2022.

11. Belton, Catherine, "Russia's security service works to subvert Moldova's pro-Western government", The Washington Post, 28 de octubre de 2022.

12. Necsutu, Madalin, "Moldova Condemns 'Russian Plan' to Regain Control of Country", Balkan Insight, 16 de marzo de 2023.

por gagaúzos –de lengua túrquica y religión ortodoxa–, y políticamente con predominancia histórica de posiciones pro-Rusia. En el contexto de invasión rusa a Ucrania, y de deterioro de las relaciones entre Rusia y Moldova y entre Rusia y Occidente, se incrementó también el distanciamiento entre el Gobierno moldavo y la región de Gagauzia. Las elecciones a gobernador/a de Gagauzia de abril de 2023 fueron señaladas en algunos análisis como un factor cuyo resultado podría ser usado por Rusia para Moldova.¹³ Los comicios otorgaron el triunfo en segunda ronda (mayo) a la candidata del partido proruso Shor, Evghenia Gutul, lo que apunta a desafíos a corto y medio plazo en las relaciones entre el Gobierno central y la región. Ya en 2014 las autoridades de Gagauzia y su población mostró su oposición a la decisión del Gobierno central de un acuerdo de asociación y de otro de libre comercio con la UE, a través de un referéndum doble no vinculante, considerado ilegal por Moldova. En esa consulta el 98% de votantes expresaron su preferencia por estrechar vínculos con la Unión Aduanera Euroasiática, liderada por Rusia, en lugar de con la UE, y manifestaron apoyo a declarar la independencia de Gagauzia si eventualmente Moldova perdía su soberanía, incluyendo escenarios como una hipotética unión de Moldova a Rumanía –con quien comparte vínculos históricos y culturales.

En cuarto lugar, Moldova sobresale como territorio donde se entrecruzan dinámicas de división y proyección de capas de conflictividad externa, situación agravada con la invasión de Rusia a Ucrania, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Moldova y el tensionamiento extremo de las relaciones entre Occidente y Rusia derivado de la invasión a Ucrania. Se identificaba en el país heterogeneidad respecto a la percepción local hacia Rusia, así como en relación a la preferencia sobre el tipo de relaciones exteriores a seguir. En junio de 2022 la UE concedió a Moldova el estatus de país candidato de entrada a la UE. Encuestas de 2022 y 2023 apuntaban a que entre el 50% y el 63% de la población era favorable a la integración en la UE, y un tercio se oponía a ello.¹⁴ Por otra parte, en 2022 Rusia intensificó sus presiones sobre Moldova en ámbitos estratégicos y de relevancia para la seguridad humana del país como la energía,¹⁵ si bien Moldova dio pasos hacia la diversificación energética.

En quinto lugar, la situación socioeconómica en Moldova se ha visto deteriorada de la mano del alza de precios, incluyendo alimentos, productos no alimentarios y servicios, con impactos severos en la población de un país considerado uno de los más pobres de Europa. El incremento de los precios de la energía afectó a amplios sectores de población. Se añadió además el reto de poder dar acogida digna a la población refugiada ucraniana (726.705 entradas al país entre el 24 de febrero de 2022 y mediados de diciembre y 99.524 personas refugiadas de Ucrania a finales de ese año, según ACNUR). En una visita en mayo a Moldova, el secretario general de la ONU calificó al país como el país vecino de Ucrania más frágil.

Al mismo tiempo, convergen factores que pueden contribuir a prevenir un deterioro de la situación sociopolítica y de seguridad. El haber atravesado el año 2022 frente al cúmulo de desafíos pone de manifiesto cierta resiliencia institucional y social. Se suma también la voluntad expresa de Transnistria y Moldova de resolver su conflicto por vía negociada y el elevado grado de relaciones económicas, comerciales y familiares entre ambos territorios; un tejido social de población activo, como se evidenció en las protestas ciudadanas anticorrupción en años recientes; el establecimiento de una misión civil de la UE en 2023 (EUMP Moldova) en el ámbito de gestión de crisis, desinformación y ciberataques, entre otros; el apoyo financiero al país para afrontar la grave crisis socioeconómica –si bien supeditado a condicionalidad de la UE y el FMI–, entre otros.

En resumen, Moldova afronta a corto y medio plazo riesgos de incremento o cronificación de tensiones entrecruzadas que requieren del fortalecimiento del apoyo internacional en ámbitos que contribuyan a la prevención de una extensión del conflicto en Ucrania, a la cohesión y fortalecimiento democrático y a la seguridad humana. A su vez, la intensificación de esfuerzos dirigidos a promover la resolución negociada de la guerra en Ucrania aceptable para Kiev y la construcción a futuro de una arquitectura de seguridad compartida continental podrían contribuir también a medio y largo plazo a una seguridad más holística de Moldova.

13. Keith Harrington, "Gagauzia's Election Could Help Russia Destabilize Moldova", *Carnegie Europe*, 27 de abril de 2023.

14. Radio Moldova, "CBS Research poll: 40% of Moldovans believe Russian Federation is to blame for provoking war in Ukraine", *Radio Moldova*, 3 de febrero de 2023; International Republican Institute, "IRI Moldova Poll Shows Strong Support for EU Membership, Trust in Leadership Despite Economic Challenges", IRI, 9 de diciembre de 2022.

15. Véase el resumen sobre Moldova en el capítulo 2 (Tensiones) de este informe.

5.5. Derechos de las mujeres bajo amenaza: apartheid de género en Irán y Afganistán

Los derechos de las mujeres de Irán y Afganistán han sido objeto de especial atención en el periodo reciente. El agravamiento de las políticas discriminatorias contra las mujeres y la intensificación de los intentos por controlar sus vidas y sus cuerpos en ambos países han estado en el foco mediático, en parte por las manifestaciones de protesta y resistencia lideradas por las propias mujeres afganas e iraníes frente a la misoginia y las vulneraciones sistemáticas de sus derechos y libertades. Las iniciativas de denuncia de la discriminación extrema, sistemática y estructural contra las mujeres en ambos países han llevado incluso a articular una propuesta de reconocimiento de la situación como un crimen de apartheid de género. Múltiples actores –incluyendo organizaciones, Estados y grupos de la sociedad civil– han denunciado la deriva contra las mujeres en ambos países y se han solidarizado y expresado su alarma ante la respuesta represiva de estos regímenes. Pese a la sonora reacción internacional, existe el riesgo de que tanto Teherán como Kabul persistan en sus políticas y que la situación de las mujeres en ambos países se agrave o perpetúe. A esto se suma la probabilidad de que con el transcurso del tiempo la atención mediática y política sobre los derechos de las mujeres en Irán y Afganistán vaya menguando. No solo eso. También es posible, sobre todo teniendo en cuenta experiencias previas, que en algunos actores de la comunidad internacional se imponga una aproximación utilitarista a los derechos de las mujeres, que los impulse o ignore en función de intereses geopolíticos y militares coyunturales.

El agravamiento de las políticas discriminatorias y de los intentos por controlar las vidas y cuerpos de las mujeres en ambos países han estado en el foco mediático en parte por las muestras de resistencia de las propias afganas e iraníes ante la misoginia y vulneraciones sistemáticas de sus derechos y libertades

En el caso de Afganistán, la situación de las mujeres se ha deteriorado especialmente desde mediados de 2021, tras la reinstauración del régimen de los talibanes.¹⁶ Su retorno al poder ha supuesto la imposición de un severo recorte de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales además de una fuerte exclusión del ámbito público, en línea con lo que ocurrió durante el primer régimen de los talibanes (1996-2001). Entre las primeras medidas adoptadas, cabe destacar el desmantelamiento del Ministerio de Asuntos de las Mujeres en septiembre de 2021. La reinstauración del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio implicaron la desaparición de las estructuras institucionales de

promoción de los derechos de las mujeres, en un Ejecutivo íntegramente conformado por hombres. También se abolió la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, dando por finalizado cualquier sistema institucional de supervisión y garantía de derechos de las mujeres o de los derechos humanos en general. Otras medidas con graves impactos han sido las relativas a la restricción a la libre movilidad de las mujeres y a su presencia en el espacio público. También se han aprobado severas restricciones a la educación, impidiendo a niñas y jóvenes el acceso a la educación secundaria y universitaria. Además, se han desmantelado por completo los servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, se han disuelto las cortes especializadas en mujeres y se impide a las mujeres juezas ejercer su labor. Así pues, se ha instaurado un contexto de completa desprotección para las mujeres y grave violación a sus derechos fundamentales.

En el caso de Irán –y pese a las diferencias con Afganistán, por ejemplo en materia de acceso de las mujeres a la educación y al espacio público–, los derechos de las mujeres han estado en el centro de la atención desde septiembre de 2022.¹⁷ La muerte de una joven tras ser detenida por la policía moral por portar el velo de manera inadecuada según los estándares del régimen activó entonces multitudinarias movilizaciones en el país. Las protestas, consideradas como uno de los mayores desafíos al régimen desde 1979, hicieron suyo el lema de las mujeres kurdas “Mujer, Vida, Libertad” y expusieron las interconexiones entre diferentes formas de opresión y discriminaciones en el seno de la república islámica y, en particular, los intentos por controlar los cuerpos de las mujeres. El desafío a la imposición de determinados códigos de vestuario por parte de las autoridades –la obligatoriedad del hiyab– ha sido interpretado como el cuestionamiento a una de las formas más evidentes y visibles de las políticas opresivas y discriminatorias del régimen –el no reconocimiento a la libre autodeterminación de las mujeres–, pero no la única. Las mujeres iraníes afrontan múltiples discriminaciones de género que se materializan en su marginación de los ámbitos de poder y decisión; enormes brechas de género en términos de desempleo y salarios; prohibición de desempeñar determinados trabajos; necesidad de

16. Para más información, véase María Villellas, “La situación de las mujeres en Afganistán. Entre la opresión y la resistencia”, *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, Núm.20, noviembre de 2022.

17. Para más información, véase Pamela Urrutia, *La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista*, *Apunts ECP de Conflictos i Pau*, Núm.27, marzo de 2023.

contar con una autorización masculina para trabajar, obtener un pasaporte o viajar; limitaciones en el acceso a derechos sexuales y reproductivos y disposiciones discriminatorias en temas como divorcio, custodia de hijos e incluso en el acceso a eventos deportivos. Tras la llegada a la presidencia de Ebrahim Raisi, en junio de 2021, la policía moral había intensificado sus actividades y se habían aprobado una serie de medidas consideradas como especialmente hostiles para las mujeres, como el incremento en los sistemas de control de los códigos de vestuario de las mujeres a través de sistemas de vigilancia digital y en redes sociales.

A pesar de las muestras de resistencia de las mujeres en ambos contextos y de las numerosas críticas a nivel internacional, ambos regímenes han persistido en sus políticas y han optado por una respuesta represiva. En el caso de Irán, esta reacción ha significado el despliegue de múltiples tácticas para intentar sofocar la contestación, que han incluido la persecución y muerte de manifestantes –entre ellas un centenar de mujeres hasta finales de 2022–, el uso de la violencia con intencionalidad de género –disparando deliberadamente a mujeres en rostro y genitales–, y masivas detenciones, entre otras prácticas. Igualmente, en Afganistán las protestas han sido duramente reprimidas, con detenciones y maltrato físico hacia las mujeres que las han protagonizado y que, no obstante, han persistido en sus acciones. Naciones Unidas ha señalado un uso excesivo de la fuerza en la respuesta de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones de mujeres.

Cabe destacar que un denominador común en ambos casos ha sido la situación de especial vulnerabilidad de las niñas. En Irán, la represión de las manifestaciones ha afectado a un gran número de menores, algunos arrestados incluso en redadas en centros escolares. Según grupos de derechos humanos, hasta finales de 2022 al menos 12 niñas y 46 niños habían muerto en acciones de las fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas. Desde principios de 2023 también se multiplicaron las denuncias de envenenamientos de miles de estudiantes en más de un centenar de escuelas de todo el país. Aunque sin resultado de muerte, estas acciones –no reivindicadas y atribuidas a sectores extremistas– fueron interpretadas como intentos de amedrentar a las menores por su implicación en las movilizaciones y de generar temor en las familias, buscando comprometer el derecho a la educación de las niñas. En Afganistán, en tanto, se han multiplicado los matrimonios infantiles como consecuencia de la grave crisis humanitaria que atraviesa el país y el aumento de la pobreza. Las severas restricciones a la educación están afectando especialmente a las adolescentes que

están siendo privadas de una formación esencial y centros educativos de niñas y jóvenes han sido objeto de ataques violentos. En ambos países se ha observado también una creciente derivación al ámbito familiar y comunitario de la vigilancia y represión de las mujeres. En Afganistán, a través de la responsabilización del control a los parientes masculinos –que son los que deben responder ante las autoridades en caso de que las mujeres de sus familias transgredan normas impuestas–, y en Irán por medio de un sistema de multas que sanciona a tiendas, restaurantes y negocios que permitan la entrada a mujeres sin el velo.

Ante esta deriva de acontecimientos, una coalición liderada por mujeres afganas e iraníes se han unido en torno a una campaña que busca promover el reconocimiento del apartheid de género como un crimen en el derecho internacional.¹⁸ Activistas y expertas en derechos humanos demandan que el

La discriminación extrema, sistemática y estructural contra las mujeres en Irán y Afganistán ha llevado a promover una iniciativa que reconozca la situación como un crimen de apartheid de género

crimen de apartheid que hasta ahora se aplica a las jerarquías raciales se articule también para reconocer las discriminaciones sistemáticas y estructurales basadas en jerarquías de género. Se trata, por tanto, de una forma de apartheid diferente a la que se vivió en Sudáfrica, pero con componentes de subyugación y segregación sistemática como los que se observan en Afganistán e Irán en la actualidad. En ambos países, subrayan, las restricciones, prohibiciones y disposiciones legales buscan someter a las mujeres a los hombres y al Estado bajo el riesgo de ser víctimas de violencia, arrestos e incluso la muerte. Las promotoras de la iniciativa aseguran que no pretenden imponer valores occidentales en sociedades musulmanas, sino hacer frente a los intentos sistemáticos por subyugar a las mujeres y convertirlas en ciudadanas de segunda clase que no deberían tener lugar en ninguna sociedad, independientemente de la religión. Su propósito es favorecer una respuesta internacional y por ello apelan a los gobiernos a amplificar las experiencias de las mujeres en Irán y Afganistán, adoptar medidas de condena al régimen de apartheid en ambos países y a contribuir en la expansión del crimen de apartheid para incluir las formas institucionalizadas de discriminación de género.

Pese a iniciativas como esta, existe el riesgo, no obstante, de que el tema decaiga en términos de atención mediática y/o que se instrumentalicen los señalamientos relacionados con los derechos de las mujeres. La experiencia de Afganistán ofrece ejemplos ilustrativos sobre esta experiencia. Los derechos de las mujeres han sido instrumentalizados repetidamente por parte de actores internacionales que han intervenido en el país. De esta manera, en el marco de la intervención militar estadounidense en el país en 2001 se estableció

18. Campaña End Gender Apartheid.

un binarismo entre la opresión causada por el régimen talibán y la supuesta “salvación” proporcionada por EEUU, restando protagonismo y agencia a las mujeres afganas y sus propias estrategias de resistencia y afrontamiento. En los años posteriores se obvió la responsabilidad de EEUU y otros gobiernos en la perpetuación de una situación de conflicto armado con graves efectos en las vidas de las mujeres. Más recientemente, en el caso de Irán, algunas voces también han alertado sobre los peligros de instrumentalización de la defensa de los derechos de las mujeres y las políticas de doble estándar. Así, por ejemplo, en diciembre de 2022 Irán fue expulsado de la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer en una iniciativa promovida por EEUU bajo el argumento de que su presencia minaba la credibilidad del organismo. Esta decisión de Washington, enmarcada en su pugna con Irán,

contrasta con las políticas (o con la inacción) ante otros Estados con credenciales similares de vulneraciones de derechos de las mujeres, pero que son aliados de EEUU, como Arabia Saudita. EEUU también se encuentra en una posición compleja en este ámbito considerando los recientes retrocesos en el ámbito de los derechos reproductivos por decisión de la Corte Suprema.

Las mujeres de Irán y Afganistán atraviesan una situación que diferentes organismos, expertas y activistas han calificado de “apartheid de género” dada la gravedad de los impactos sobre sus vidas. Esta situación pone de manifiesto también el riesgo de deterioro de las crisis y conflictos que atraviesan estos países. No hay que olvidar que los derechos de las mujeres y la igualdad de género son indicadores y precondiciones para el desarrollo de sociedades pacíficas.

